

**Oficio número TRANS-544/2024
Respuesta.**

Leoncio Morán Sánchez.

Presente.

En atención a la solicitud de información que presentó en la Plataforma Nacional de Transparencia de esta Fiscalía General del Estado, a la cual le fue asignado el número de folio 061903924000215, mediante el cual solicita:

"Solicito el número de elementos de seguridad que en lugar de estar en funciones operativas se encuentran asignados a labores de seguridad personal de funcionarios y sus familiares (No se está pidiendo perfiles, ni ubicaciones, ni ninguna información que ponga en riesgo; solamente el número total de estos policías que están distraídos de su función para cuidar a funcionarios y sus familiares). En caso de que la información esté reservada por motivos de seguridad, se pide se transparente la prueba de daños que por ley deben hacer para determinar la reserva de la información, y que se detalle el marco lógico con el cual llegaron a esa resolución, pues no puede quedar sólo como algo meramente enunciativo."

Con fundamento en lo establecido por los artículos 5, 10, 26 fracción VI, 57 fracción I, inciso a) y II a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, me permito informarle que:

Derivado de la naturaleza de la información que solicita, mediante mi similar **TRANS-505/2024**, fue remitida su solicitud a la **Dirección General de la Policía Investigadora** para dar el adecuado cumplimiento a la petición realizada, en atención a que dicha área es la responsable de generar la misma; en ese orden de ideas mediante oficio **FGE/DGPI/2763/2024**, suscrito por el Maestro Fernando Arturo Vega Alcaraz, en su carácter de **Director General de la Policía Investigadora** de la Fiscalía General del Estado de Colima, da respuesta a los planteamientos realizados; por tal motivo para estar en condiciones de cumplir con lo establecido en la Ley, se adjunta al presente la información obtenida.

Con lo anterior, se da por cumplido, los extremos que se enmarcan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, observando el principio de máxima publicidad el cual implica poner a disposición de toda persona la información que se produzca en esta Fiscalía General.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 15 DE MAYO DEL 2024.
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**

LICENCIADO JUAN CARLOS CERVANTES SALAS



OFICIO: FGE/DGPI/2763/2024
ASUNTO: SE INDICA
Colima, Col., a 09 de MAYO de 2024

LIC. JUAN CARLOS CERVANTES SALAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Por medio del presente, en atención al oficio número **TRANS-505/2024**, recibido el día 7 (siete) de mayo del presente año en el cual se me informa de la solicitud **061903924000215** en la cual el C. Leoncio Morán Sánchez, solicita lo siguiente:

"Solicito número de elementos de seguridad que en lugar de estar en funciones operativas se encuentran asignados a labores de seguridad personal de funcionarios y sus familiares (No se está pidiendo perfiles, ni ubicaciones, ni ninguna información que ponga en riesgo; solamente el número total de estos policías que están distraídos de su función para cuidar a funcionarios y sus familiares). En caso de que la información esté reservada por motivos de seguridad, se pide se transparente la prueba de daños que por ley deben hacer para determinar la reserva de la información, y que se detalle el marco lógico con el cual llegaron a esa resolución, pues no puede quedar sólo como algo meramente enunciativo."

Con fundamento en el artículo 110, 111, 114, 115 y 116 en su fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, dicha información ha sido considerada reservada, la difusión de la información permitiría que diversos grupos, con la finalidad de inhibir, menoscabar o bloquear las acciones específicas que se realizan para la investigación y persecución de los delitos, por lo cual, no es procedente permitir el acceso, la consulta y/o la reproducción de la información solicitada; no omito mencionar que la prueba de daños elaborada para la misma, ya fue valorada y confirmada la determinación de la reserva de información por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima en el Exp. **CTFGEC-045-2023**. La cual se relaciona estrechamente con la solicitud en mención, la cual fue remitida al Comité de Transparencia para su valoración.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.

FGE | Fiscalía General
del Estado de Colima

Dirección General de la Policía Investigadora

MTRO. FERNANDO ARTURO VEGA ALCARAZ.

EXP. CTFGEC-045-2023

- - Colima, Colima a 01 de septiembre del año 2023, la suscrita C. Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, doy cuenta a los miembros del Comité de Transparencia del oficio No.FGE/DGPI/4762/2023, presentado por el Director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General, mediante el cual se pronuncia sobre la reserva de la información relacionada con;

"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?."

Lo anterior, derivado de la solicitud de información realizada por el C. **"David González"**, mediante el portal web de la Plataforma Nacional de Transparencia, radicado mediante el número de folio **061903923000503**.

- - - **VISTO** para **RESOLVER** la confirmación, revocación o modificación de la determinación de la reserva de la información realizada por el Director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado, y estando debidamente constituido el Comité de Transparencia, presidido por el C. Director General de Procedimientos Penales y con la participación del Director General de Servicios Administrativos y del Órgano Interno de Control que lo integran, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, procede a realizar el estudio y análisis de la resolución administrativa que a continuación se presenta, y - - - - -

RESULTANDO

1. El día 28 de agosto del año 2023, se recibió la solicitud de información realizada por **"David González"** mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, radicada

bajo el número de folio **061903923000503**, solicitando de forma textual lo siguiente:

"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"

2. Mediante oficio TRANS-1063/2023, de fecha día 29 de agosto del año 2023, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, solicitó el apoyo de la Dirección General de la Policía Investigadora de esta Fiscalía General, para que realizara las acciones y trabajos correspondientes, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia Local.
3. Finalmente, fue remitido a este Comité, mediante oficio No.FGE/DGPI/4762/2023, de fecha 01 de septiembre del año 2023, y suscrito por el Director General de la Policía Investigadora, la prueba de daño correspondiente, respecto de la reserva de información referente a **"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"**; prueba de daño que se pone a consideración del Comité, para que en su caso declare procedente confirmar, modificar o revocar la reserva de la información realizada por dicha Dirección. - - - - -

CONSIDERANDOS

1. **COMPETENCIA.** Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, es el Órgano Colegiado competente para conocer de la presente determinación de reserva de información con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

El Comité de Transparencia se encuentra integrado por tres miembros que serán el Director General de Procedimientos Penales, el Director General de Servicios Administrativos y el Órgano Interno de Control.

El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Director General de Procedimientos, o quien presida el Comité en su ausencia, tendrá voto de calidad.

Los miembros del Comité podrán ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los servidores públicos adscritos a su dirección que al efecto designen como sus representantes.

2. ANÁLISIS DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Se advierte que con fecha 01 de septiembre del año 2023, fue recibido oficio No.FGE/DGPI/4762/2023, suscrito por el Director General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado, con fundamento en la fracción II del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, confirme, modifique o revoque la determinación de reserva de la información que fue solicitada mediante folio número **061903923000503**, en atención a los siguientes argumentos:

"Oficio No. FGE/DGPI/4762/2023

[...]

Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que el día 29 (veintinueve) de agosto del año en curso, mediante oficio **TRANS-1063/2023**, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, me fue remitida la petición de acceso a la información pública que fue presentada por quien se identifica como "David González", la cual fue registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) mediante el folio número 061903923000503, mediante el cual solicita la siguiente información:

"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"

En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 111, 114 y 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, esta Dirección General de la Policía Investigadora, pone a consideración del órgano colegiado competente,

la propuesta de clasificación de información reservada, la que consistente en: **“¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?”**

Toda vez que, a nuestra consideración, la misma se encuentra prevista en la hipótesis de excepción contenidas en el artículo 116, de la fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, por lo cual resulta procedente clasificar dicha información como reservada, al tenor de las consideraciones que más adelante se describen.

Para el estudio y análisis de la presente prueba de daños esta Dirección General de la Policía Investigadora, realiza una estructura que permita allegarse a los elementos lógicos jurídicos que permitan determinar la procedencia de la presente prueba de daño, los cuales se dividen en los siguientes puntos: Fundamentación; Motivación; Riesgo Real, Demostrable e Identificable; Ponderación; Proporcionalidad; Periodo de Reserva y; Clasificación.

FUNDAMENTACIÓN

Con fundamento en el artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a la información pública, es un Derecho Humano consagrado en la misma, es obligación de la Federación, los Estados y los municipios, garantizar el ejercicio de este derecho en favor del gobernado, no obstante, es necesario precisar que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los principios y bases que rigen el ejercicio de este Derecho. En este sentido y previendo el constituyente que los entes públicos poseen información que temporalmente debe estar fuera del acceso al público debido a que su difusión puede poner en riesgo la vida, seguridad y salud de las personas, así como la seguridad, estabilidad, gobernabilidad y democracia de la entidad federativa o sus municipios, es por ello que introdujo en el Pacto Federal la hipótesis o el caso específico para reservar temporal de información específica, por razones de interés público pero siempre en los términos que fijen la leyes; así pues la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, establece la prevalencia de los principios de “máxima publicidad” y “pro persona” en sus artículos 2 y 6, en su aplicación e interpretación, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados.

A pesar de que constituye una obligación en materia de transparencia el dar a conocer los datos generales, también lo es que existen excepciones que aplica a supuesto en el cual nos encontramos, tal como lo establece el artículo 116, en su fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece lo siguiente:

Artículo 116.- Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten.

En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Lo cual encuentra relación con el artículo décimo séptimo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de versiones públicas:

Décimo Séptimo

....

Podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignent

Décimo Octavo

...

Así mismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnologías, información, sistemas de comunicaciones.

...

MOTIVACIÓN

A efecto de resolver la solicitud en supra líneas, se realiza una ponderación de derechos y principios, tomando en primer lugar como principio rector al de máxima publicidad respecto al acceso de información y por la otra el de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia; bajo este tenor se toma en cuenta que el ejercicio del derecho de acceso información previsto desde la esfera internacional en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos desde el que se dispone como límite de la publicidad de la información, específicamente cuando sea necesaria para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública; numeral anterior que es acorde con el contenido del diverso 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como parte de los Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión, en la Declaración Conjunta (2006) el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, en la discusión en conjunto relativa a los temas de la materia, para lo que aquí interesa se subrayó que las excepciones al derecho al acceso a la información deben ser establecidas de manera clara y el acceso debería ser autorizado a menos que la divulgación causara daño serio a un interés protegido, o bien que este daño es mayor que el interés público en acceder a tal información.

En este orden de ideas, la fracción primera del apartado "a" del artículo sexto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

En el ámbito local, nuestra Constitución es acorde a lo previsto en la Constitución Federal, pues en la fracción primera del apartado "b" del artículo 5 cinco se refiere a la posibilidad de reservar temporalmente la información por razones de interés público y seguridad en términos que fijan las leyes.

El dilema planteado de conflicto entre principios, supone elegir la opción más racional que interfiera lo menos posible entre estos, fortaleciendo esta decisión con las premisas jurídicas que puedan fortalecer esta decisión.

Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial, en el caso que nos ocupa y que motiva la posible reserva de la información es lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que textualmente indica que se considera información reservada "aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnologías o equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública o el combate a la delincuencia, así como la integración de los resultados de las evaluaciones de confianza".

Es evidente que de acceder a la entrega de la información solicitada, se estaría poniendo en riesgo el estado de fuerza de esta Fiscalía, pues la difusión de los datos requeridos permitiría que diversos grupos, con la finalidad de inhibir, menoscabar o bloquear las acciones específicas que se realizan para la investigación y persecución de los delitos, tengan conocimiento de las capacidades, estrategias y métodos realizados para la obtención de información vital en la persecución de los delitos por lo cual, no es procedente permitir el acceso, la consulta y/o la reproducción de la información solicitada. En ese sentido, es obligación de esta Fiscalía General del Estado, proteger la información a la que solo las instituciones de seguridad pública y demás autoridades competentes, podrán tener acceso.

RIESGO REAL, DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE

Así pues, del análisis lógico jurídico, y de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos en el cuerpo del presente instrumento, esta Dirección General de la Policía Investigadora, considera que la información solicitada, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público en atención a las siguientes consideraciones:

Riesgo Real. – La información sobre el número de agentes de investigación con los que cuenta la institución. La entrega del mismo implicaría poner en riesgo el estado de fuerza de nuestra institución y la eficacia de la investigación en curso, que se obstruya la prevención o persecución de los delitos, por tanto, lo procedente es reservar dicha información.

Riesgo demostrable. – Ciertamente es que el derecho de acceso a la información es reconocido desde el marco Constitucional no menos cierto es que éste no es absoluto, pues al difundir información como la solicita no se estaría cumpliendo por parte de esta Fiscalía con nuestra obligación de no ventilar información de carácter reservada, por lo que la limitante se adecua al principio de proporcionada y representa el medio menos restrictivo posible evitar el perjuicio que se pudiera ocasionar. En este sentido, revelar la información requerida representa un menoscabo para la investigación y persecución del delito, pues, como ya se ha repetido, la reserva de la información, se encuentra expresamente prevista en diversas disposiciones normativas con tal carácter, siendo estas previsiones de orden público y de observancia general.

Riesgo identificable. – Si bien es cierto que la información generada por autoridades en el ejercicio de sus funciones, en este sentido, las autoridades de investigar hechos ilícitos, como lo es la Fiscalía General del Estado de Colima, deben de guardar sigilo y secrecía sobre sus actuaciones, pues no debe perderse de vista que, en muchos casos, el éxito de las investigaciones depende de que sean oportunas y discretamente conducidas.

PONDERACIÓN

En adición a lo expuesto, se estima que la clasificación antes advertida también se actualiza desde la especificidad que en aplicación de la prueba de daño mandatan los artículos 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, cuya delimitación como se verá enseguida, necesariamente debe responder a la propia dimensión del supuesto de reserva con el que se relacione su valoración. El citado ordenamiento identifica un catálogo de hipótesis a partir de las cuales deberá entenderse reservada cierta información, cuya esencia, más allá de su ámbito genérico de protección, se construye a partir de elementos y objetivos diametralmente distintos y específicos, lo que, por ende, incide en la valoración (particular intensidad) de la prueba de daño que sobre cada uno pueda prevalecer (en cada caso concreto).

En el caso, de acuerdo con el alcance de la causa de reserva prevista en el artículo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correlacionado con el diverso numeral 116 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que estima que se obstruya la prevención o persecución de los delitos.

Es por ello, que resulta evidente que al brindar la información que se solicita sobre el **"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"** pudiera llevar al fracaso de las investigaciones que persiguen delitos.

PROPORCIONALIDAD

Se debe tomar en cuenta que, de acceder a la entrega de la información, se estaría poniendo en riesgo el estado de fuerza y esto podría obstruir la prevención o persecución de los delitos.

De este modo, se colige que si bien, la información requerida encuadra el supuesto de reserva, ésta no pierde el carácter de pública, sino que se reserva temporalmente del conocimiento público, es decir, que, por un tiempo determinado, se conservará y custodiará la información de manera especial, siendo que, transcurrido el plazo de reserva, el documento podrá divulgarse.

PERIODO DE RESERVA

En virtud de lo anterior, solicito al Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que la información relativa a **"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"**

Sea considerada como información reservada por un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se resuelva la procedencia de la reserva por parte de ese Comité de Transparencia.

CLASIFICACIÓN

Por virtud de lo anterior, y con fundamento en lo establecido en los numerales 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 10, 60, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 12, 13, 214, 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 106 numeral 4 y 5 fracción IV y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 106, 110, 111, 112, 114, 115 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 103, 04 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, esta Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas clasifica de naturaleza reservada la información solicitada por el ciudadano, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, e imágenes o cosas que le estén relacionados, hasta en tanto haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Colima, lo que en su momento exigirá una valoración particular sobre la información confidencial que, en su caso, pudiera contener, así como sobre la necesidad de generar la versión pública respectiva.

Por lo tanto, se considera que la información que se solicita es de carácter RESERVADA, en virtud de encontrarse sustraída temporalmente del conocimiento público en atención a las manifestaciones rendidas en el presente escrito.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 28, 51, 52, 53, 54, 110, 112, 116, 128 y 129, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Colima, atentamente,

PIDO:

UNICO. - Confirmar la reserva que se plantea en virtud que la información que se solicita se encuentra con tal carácter en atención a los establecido en el artículo 116 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y las manifestaciones rendidas en la presente prueba de daño.

[...]"

3. ANÁLISIS DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la reserva de la información emitida por la Dirección General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, obedece al cauce natural que se deriva de una interpretación literal de la legislación que rige nuestras actuaciones.

Luego entonces, con relación a la reserva de información relativa a; **“¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?”** se determina que la reserva de dicha información, se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 116 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, cuenta con la motivación y fundamentación adecuada, la cual permite allegarse de los elementos administrativos necesarios para que este Comité se encuentre en condiciones de resolver respecto de la información reservada, tal como se encuentre establecido por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la clasificación de información reservada emitida por el Director General de la Policía Investigadora, obedece al acuse natural que se deriva de una interpretación literal de la legislación que rige nuestras actuaciones.

En éste sentido para mejor proveer en la argumentación del asunto en cuestión, es indispensable establecer los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener acceso a la información pública, mediante procedimientos sencillos y expeditos, pero al mismo tiempo vigilar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como la información reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente, todos ellos son elementos que debemos de ponderar en la solución y respuesta a los planteamientos concretos de la ciudadanía en las solicitudes de información.

Luego entonces, para poder arribar a una resolución administrativa en donde exista una motivación y fundamentación adecuada, que reúna con suficiencia y razonabilidad legal, las argumentaciones jurídicas en las que se sustenta la presente determinación, partiremos de un análisis de los argumentos expuestos por la Dirección General de la Policía Investigadora, ponderando a la luz de los derechos

fundamentales de acceso a la información que le asisten a la solicitud, las facultades y obligaciones de los sujetos obligados.

En este sentido, este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, en un ejercicio de estudio y análisis de los solicitado por el C. **"David González"**, pondera con sumo cuidado **la clasificación de información reservada**, decretada por el Director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, por el periodo máximo de cinco años, en atención primordialmente a las siguientes consideraciones:

Este Comité de Transparencia considera que la información solicitada encuadra en los supuestos de información protegida, cuyo acceso deberá estar limitado temporalmente y deberá sujetarse a las limitaciones que le devienen al carácter de Reservada; razón por la cual no deberá proporcionarse o permitirse su acceso ejerciendo el derecho de información, existiendo la obligación de reserva por disposición imperativa de la propia normatividad aplicable, que sujeta a la clasificación que de ella se realice en el presente dictamen y en consecuencia como resultado la misma no podrá ser proporcionada, ministrada o permitirse su acceso a persona alguna distinta de las que por disposición de la Ley aplicable tengan la atribución de requerir información a ésta Fiscalía Estatal, o bien, por la naturaleza propia de sus funciones, deban o puedan tener acceso a la misma, lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo 116 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; en virtud de que, debido a las funciones que por disposición legal desempeña esta institución como órgano procurador de justicia, pudiera resultar riesgoso el hecho de ministrar, permitir el acceso a **"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"**, se estaría dando acceso a la información sobre inteligencia en el combate a la delincuencia, ya que se obtendría información relevante en materia de seguridad pública y procuración de justicia, puesto que se facilitaría la evasión de los mecanismos de investigación y con ellos la procuración de justicia, ya que se pondría de forma

pública los mecanismos que pudieran ser utilizados de forma malintencionada para evadir las investigaciones correspondientes.

En este sentido es evidente el riesgo de proporcionar información referente al **"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"**, ya que la divulgación de esta información podría ser conocida por grupos delictivos buscando sobreponerse ante el alcance de nuestro personal. Situación en la que se pone en riesgo la seguridad pública, dado que la información sobre los policías, agentes y/o personal operativo, dan como resultado datos de inteligencia necesarios para el desarrollo de las actividades dentro de la procuración de justicia, en la que persiguen e investigan a probables responsables de conductas delictivas, entre ellas, las consideradas como graves por las leyes punibles en nuestra entidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 81 de su análoga estatal, y 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima; es la responsable de la procuración de justicia, en los términos de lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad y profesionalismo.

De lo anterior, y tomando en consideración lo establecido en el artículo 2 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece literalmente lo siguiente:

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los

delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así **como la investigación y la persecución de los delitos** y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 110.-

...

Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.

Complementada con lo que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima en sus artículos 106 numerales 5 fracciones II que textualmente expresa:

ARTÍCULO 106. Información contenida en las bases de datos

...

5. Para efectos de la presente Ley se considera información reservada, sin necesidad de emitir el acuerdo respectivo, la siguiente:

...

II. Aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública o el combate a la delincuencia, así como la integración de los resultados de las evaluaciones de control de confianza;

...

Por ello este cuerpo colegiado, considera que el hecho de dar a conocer **“¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?”**, atenta contra el interés público y difunde información que, sin duda alguna, pone en desventaja a esta autoridad, ya que ello le restaría capacidad, trayendo consigo un perjuicio insalvable a las acciones que hasta el momento han sido emprendidas para combatir al crimen, recuperar el orden y mantener la paz pública en Colima.

Por lo anterior, del análisis lógico jurídico, y de la interpretación sistemática de los preceptos invocados y los transcritos en el cuerpo del presente instrumento, este Comité de Transparencia arriba a la conclusión para determinar que la revelación, difusión y/o entrega de la información que solicita, produce los siguientes:

Daño probable. - Se configura al hacer pública la información relacionada a **“¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?”**, que refiere parte de esta institución, se pondrían en riesgo información que pudiera evidenciar acciones estratégicas en materia de procuración de justicia, así como la vida de los policías, agentes de investigación y/o personal operativo, lo anterior de conformidad en lo establecido por el artículo 116 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; ello virtud de que, debido a las funciones que por disposición legal desempeña esta institución como órgano procurador de justicia, pudiera resultar riesgoso el hecho de ministrar, permitir el acceso o proporcionar información relacionada a las características pretendidas, ya que de llegarse a conocer, se comprometería seriamente la seguridad pública de nuestra entidad, puesto que denotaría los instrumentos que son utilizados en áreas específicas para llevar a cabo las acciones de investigación y persecución de posibles conductas delictivas y la probable responsabilidad de

personas en su comisión, ya que son herramientas de trabajo que están a cargo de elementos operativos integrantes de esta institución y, el hecho de informar sobre la información antes mencionada, se estaría en posibilidad de poner en desventaja a esta Fiscalía General, lo que resulta sensible para el buen desempeño de las labores en materia de procuración de justicia. Por lo que se reitera que de llegarse a conocer dicha información se puede comprometer seriamente la seguridad pública, información que lamentablemente grupos de la delincuencia organizada hacen lo posible por obtener la mayor información respecto a la autoridad, para mermar sus estrategias tácticas para combatir la delincuencia y disminuir la efectividad de la seguridad pública y procuración de justicia. Por tanto, aplica al presente caso la excepción al principio de publicidad de la información requerida.

Daño Presente. - Considerando que dicho daño es aquel detrimento real y actual, que se da al momento en el que se difunda la información relacionada a **"¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?"**, nos lleva a puntualizar que, indudablemente en la época actual, entregarse o darse a conocer dicha información, se estaría otorgando información estratégica en materia de seguridad pública y prevención del delito y se pondría en riesgo la investigación realizadas por esta Fiscalía General; es decir, se estarían exponiendo o brindando a la luz los datos esenciales, que de llegarse a conocer por la ciudadanía en general puede comprometer seriamente la procuración de justicia y seguridad pública de la entidad federativa en que habitamos, la cual al ser pública, pudiera ser utilizada por la delincuencia organizada, para mermar sus estrategias tácticas para combatir la delincuencia y disminuir la efectividad de la seguridad pública, pues los grupos delictivos procurarían superar las tecnologías de esta Fiscalía General y esto pudiera entorpecer la actuación de los servidores públicos en mención y se lesionarían intereses generales y particulares. Por tanto, aplica al presente caso la excepción al principio de publicidad de la información requerida.

Daño Específico. - Éste se define como aquel daño verosímil donde la probabilidad de que ocurra es alta. Dicho de otra manera, que existen razones para creer que sucederá un daño al momento de difundir la información. Efectuando un análisis a los valores en conflicto, tales como dar información de gran interés y utilidad para que grupos de delincuencia organizada puedan organizar, planear y ejecutar dinámicas delictivas en agravio de personal operativo de la institución y de la sociedad en general, por lo tanto no se justifica el interés particular de una persona, pues un interés particular de acceso a la información, no puede estar sobre el principal bien jurídico tutelado por el estado, que es la vida, y un interés general como lo es el orden y la paz social.

De igual manera, su revelación ocasionaría la ineludible responsabilidad para esta Fiscalía Estatal, al trasgredir disposiciones de carácter obligatorio para proteger y resguardar información reservada, y de la cual se actualiza la necesidad de mantenerla en reserva. Por lo anterior, a consideración del Comité de Transparencia se justifica la necesidad de limitar temporalmente el acceso a la información pública pretendida y, como consecuencia, considera procedente resolver:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, es el Órgano Colegiado competente para conocer de la presente determinación de reserva de información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

SEGUNDO. Es procedente clasificar como información Reservada, toda vez que la información relacionada "**¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación laboran en la Fiscalía (o en su caso, en la Agencia Estatal de Investigación o la Policía Estatal de Investigación)? ¿Cuántas personas en el estado reciben un servicio de escolta por parte de la Fiscalía? ¿Cuántos agentes de investigación o policías de investigación están asignados actualmente a servicio de escolta?**", por su trascendencia, alcance y repercusión social, es información pública que encuadra en los supuestos de restricción, establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Colima, con el carácter de Reservada, por un plazo de cinco años. Lo anterior de acuerdo con lo señalado en el cuerpo del presente dictamen.

TERCERO. Notifíquese a la brevedad la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones conducentes.

- - - Así lo resolvió y firman el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, por unanimidad de votos de su presidente, Lic. Raúl Ramírez Flores, Director General de Procedimientos Penales, Lic. Luis Alejandro Almaraz Alcaraz, Director General de Servicios Administrativos y Lic. Fernando Gutiérrez Fuentes, Órgano Interno de Control. - - - - -

LIC. RAÚL RAMÍREZ FLORES,
Director General de Procedimientos Penales

LIC. LUIS ALEJANDRO ALMARAZ ALCARAZ,
Director General de Servicios Administrativos

LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ FUENTES,
Órgano Interno de Control

LICENCIADA CYNTHIA ROCÍO FLORES VÁZQUEZ,
Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia
de la Fiscalía General del Estado de Colima

La presente hoja de firmas corresponde a la Resolución del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima No. **CTFGEC-045-2023**